

**TRIBUNAL SUPREMO
SALA PRIMERA**

GABINETE TÉCNICO



**SENTENCIAS FIRMADAS
DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2025,
SECCIÓN 1ª**

**D^a. María Ángeles Parra Lucán
D. José Luis Seoane Spiegelberg
D. Antonio García Martínez**

Agustín Pardillo Hernández,
Letrado del Gabinete Técnico.

1.- SENTENCIA 631/2025, DE 28 DE ABRIL. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 5741/2024
Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg
Votación y fallo: 22/04/2025

Materia: Filiación. Reclamación de filiación no matrimonial sin posesión de estado. Caducidad de la acción por transcurso del plazo de un año.

«El recurso exige que interpretemos la expresión normativa «conocimiento de los hechos en que hayan de basar su reclamación», es decir, desde que se enteró el demandante de su condición de progenitor de la menor.

Ahora bien, difícilmente se pueden fijar pautas o criterios sólidos y seguros al respecto, en tanto en cuanto se trata de un juicio de ponderación circunstancial con las dificultades añadidas en cuanto a la paternidad (mater semper certa est, la madre siempre es cierta), derivadas de la naturaleza íntima de las relaciones causantes del nacimiento, así como en la dificultad de saber de qué relación concreta, si las hubo con diferentes varones, se produjo la gestación y el nacimiento correspondiente.

Estas dificultades han determinado que, en beneficio de la madre y del hijo operen una suerte de presunciones legales, entre ellas la de paternidad matrimonial (pater is quem nuptiae demonstrant, es padre el que demuestra el matrimonio); mas, en este caso, los litigantes no se encontraban casados, aun cuando convivieran en relación de pareja.

Tampoco podemos fijar, como día inicial del cómputo del plazo, el de la constancia cierta de la paternidad, pues tal pauta determinaría que la acción pudiera ejercitarse sine die, toda vez que solo podría obtenerse ésta mediante la práctica de pruebas biológicas. Bastará, en consecuencia, con que se tengan elementos suficientes para concluir que la paternidad reclamada es razonable, probable o verosímil y no una mera sospecha o intuición.

Pues bien, en este caso, el demandante convivía con la demandada al tiempo en que quedó embarazada, y en tal periodo de tiempo mantenía con ella relaciones sexuales; en otro caso, la presente demanda carecería del más mínimo sentido. La posibilidad de su paternidad era pues real y efectiva, no constituía una mera quimera o remota probabilidad.

No obstante, renunció a la reclamación de la filiación cuando se produjo el nacimiento de la niña en diciembre de 2019. Además, se atribuyó la paternidad en unos WhatsApp dirigidos a la madre, que no le negó su paternidad, momento en el que pudo entablar la acción como razona el tribunal provincial, y, sin embargo, no lo hizo.

Lejos de ello, esperó a que transcurriera con creces el plazo de un año, y con fundamento en una supuesta conversación con sus hermanos -tampoco acreditada- y con el débil fundamento de un parecido físico, se ejercita la acción.

No vemos que el juicio valorativo de la audiencia de que la acción haya caducado sea irracional o ilógico, con lo que el recurso debe ser desestimado». Se desestima el recurso de casación.

2.- SENTENCIA 650/2025, DE 28 DE ABRIL. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 1544/2023
Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg
Votación y fallo: 23/04/2025

Materia: División judicial de la herencia. Naturaleza privativa o ganancial de inmueble adquirido en una situación de ruptura de las relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges.

«Se insiste en que, al comprar la mitad indivisa del inmueble litigioso, el 3 de mayo de 1978, se encontraba casada, lo que era obvio, precisamente si se hubiera producido la separación judicial no tendría sentido la aplicación de la doctrina jurisprudencial antes reseñada, puesto que, en tal caso, estaría disuelto por ministerio de la ley el régimen de gananciales. Además, el divorcio en España se regularizó por Ley de 7 de julio de 1981.

Es cierto que, en dicho acto jurídico, la causante utilizó un poder otorgado por su marido. Ahora bien, en esa época (1978), vigente la regulación del CC, dada por la Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre la situación jurídica de la mujer casada, se discutía si esta podía, por sí sola, comprar bienes inmuebles, en tanto en cuanto realizar una inversión de tal naturaleza constituía un acto de administración y, en consecuencia, una usurpación de las funciones que al marido la ley le seguía atribuyendo como administrador de la sociedad conyugal (arts. 59 y 1412 del CC), desde esta perspectiva la utilización del poder de 1961 tenía explicación plausible.

A más abundamiento, la causante era funcionaria pública y, en tal condición, contaba con ingresos económicos suficientes para adquirir la mitad del referido inmueble. Al testar, D. José no hace referencia alguna, en su relación patrimonial de bienes, al piso litigioso sino tan solo a bienes propios, al tiempo que insiste en su condición de divorciado tal y como consta en su acto de última voluntad, lo que implica un reconocimiento expreso, por su parte, de la no vigencia entre ellos del régimen ganancial.

En la tesitura expuesta, no podríamos aceptar una pretensión del padre de las litigantes, que tampoco ejercitó en vida, pese a fallecer a los 93 años, tendente a atribuir la condición de común al piso objeto del proceso, por lo que tampoco se la podemos asignar al realizar las operaciones particionales de la herencia de la que fue su esposa, con respecto a la cual llevaron vidas independientes con plena autonomía económica durante un más que significativo y dilatado periodo de tiempo de más de cuarenta años.

La jurisprudencia expuesta conduce a la estimación del recurso de casación, toda vez que concurren los presupuestos condicionantes de su aplicación al caso; por lo que procede asumir la instancia y, con ello, ratificar la atribución de la condición de privativo del inmueble litigioso de la misma manera que fue resuelto por el juzgado de primera instancia». Se estima el recurso de casación.

3.- SENTENCIA 731/2025, DE 13 DE MAYO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 275/2020

Ponente: Excm.a Sra. D.^a M.^a Ángeles Parra Lucán

Votación y fallo: 29/04/2025

Materia: Responsabilidad del profesor de gimnasia y del centro docente por las graves lesiones sufridas por una niña de seis años a consecuencia de un accidente. Falta de acreditación de la culpa o negligencia.

«Aquí no se discuten la existencia de unas lesiones padecidas por X, ni tampoco que se ocasionaron al recibir de una compañera un golpe en la espalda durante la práctica de un ejercicio denominado «els barrufets») sino si en atención a las denunciadas por los actores ahora recurrentes inidoneidad del ejercicio practicado, la omisión de vigilancia e incumplimiento del protocolo de actuación ante lesiones, deben responder el profesor y el centro docente. Y precisamente porque la sentencia recurrida descarta la falta de idoneidad del ejercicio, rechaza que el ejercicio se realizara sin supervisión del profesor y excluye igualmente que se produjera una falta de asistencia a la menor tanto por los docentes como por el centro, no encontramos indicios que, sumados a la forma en la que se produjo el daño, nos permitan deducir con arreglo a criterios razonables que el daño tuvo que producirse por culpa del profesor o del centro.

La doctrina del daño desproporcionado, en atención a las peculiaridades y circunstancias de cada caso, representa una excepción a la regla general de que incumbe la carga de la prueba de la culpa y del nexo causal al demandante, partiendo de que se puede inferir la negligencia a partir de la desproporción del daño. La enormidad del daño actúa como evidencia que hace surgir una deducción de negligencia en los casos en los que el resultado dañoso se inserta en la esfera de actuación del demandado y es un tipo de daño de los que habitualmente no se producen sino por razón de una conducta negligente

En este caso, partiendo del daño sufrido por X al practicar un juego programado en la actividad de gimnasia en el colegio, no podemos presumir la culpa del profesor y ni del colegio. No podemos deducir con apoyo en máximas de experiencia que exista una conexión que justifique un juicio de inferencia en el sentido de que podamos llegar de manera lógica y razonable a deducir la culpa en la conducta de los demandados. La culpa no resulta por sí sola de la forma de producción del accidente (que otra niña de su misma edad cayera sobre X al practicar el juego) ni existe ningún otro hecho o indicio que apoye y justifique la inferencia judicial de culpa. Como resulta de la sentencia recurrida, el ejercicio era idóneo para niños de la edad de X, y no comporta un riesgo potencial fuera de lo normal: «Nos encontramos efectivamente ante un riesgo en una actividad con una clara determinación formativa en su intencionalidad con reglas que no exceden a una complejidad elevada, sin que además haya quedado acreditado que durante la realización de la actividad tuviera lugar una exacerbación del riesgo o clara peligrosidad del mismo». Se descarta también la falta de supervisión del profesor durante la clase de gimnasia. Y se rechaza también la falta de asistencia a la menor por parte de los docentes y del propio centro.

Sin duda se trata de un daño enorme y de un daño absolutamente inusual, pero que es consecuencia de un riesgo infrecuente en los juegos y actividades deportivas practicadas por los niños, lo que no implica la negligencia de los demandados». Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación.

4.- SENTENCIA 730/2025, DE 12 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 2775/2024
Ponente: Excm.a Sra. D.^a M.^a Ángeles Parra Lucán
Votación y fallo: 06/05/2025

Materia: Derecho de familia. Solicitud de medidas. Rebeldía. Nulidad de actuaciones. No procede.

«Como bien dice el Ministerio fiscal en su informe, el Juzgado de Primera Instancia obró correctamente, pues emplazó a la demandada por edictos tras resultar infructuosos los intentos en los domicilios conocidos, tras consultar al PNJ y resultar infructuoso el nuevo emplazamiento y tras requerir al demandante para que aportara nuevos datos y recibir de este la contestación de que no conocía otros datos.

Aun en el caso de que pudiera deducirse que el demandante tenía constancia del número de teléfono de la demandada y no lo aportó al Juzgado, tampoco procedería declarar la nulidad de actuaciones si partimos, como considera probado la Audiencia, de que la demandada conocía desde el primer momento la existencia del procedimiento, lo que concluye razonablemente con apoyo en el argumento de que "no tiene sentido que la tercera persona se dirigiera por primera vez a la apelante para decirle que se le acababa el plazo para recurrir la sentencia".

Como pone de relieve el Ministerio fiscal, los pedimentos del Sr. M no eran, en absoluto, exorbitantes y el juzgado y el fiscal los consideraron adecuados al interés superior del menor. En relación con el régimen de visitas, el Sr. M pidió que el menor fuese examinado por el equipo psicosocial, comprometiéndose a acatar lo que por el mismo se estableciera (acontecimiento 5). Y, además, la actuación procesal del demandante no se compadece con un intento de conseguir que el procedimiento se siguiera en rebeldía, pues: 1) interesó la localización de la demandada mediante la información del PNJ; 2) a través de una persona interpuesta comunicó a la demandada la pendencia del procedimiento.

Por otra parte, cuando la Sra. C se persona en las actuaciones, pese a que había recaído sentencia en primera instancia, podía haber presentado alegaciones y prueba de las cuestiones objeto de debate (custodia, visitas y alimentos). Sin embargo, en lugar de hacer uso de las enormes posibilidades flexibilizadoras derivadas del art. 752 LEC para oponerse a las pretensiones del Sr. M, la Sra. C no realizó ninguna alegación sobre los hechos de fondo y opta simplemente por interesar la nulidad.

En definitiva, de acuerdo con todo lo anterior, el recurso se desestima porque para que quepa denunciar la práctica indebida del emplazamiento edictal es preciso que se haya producido una indefensión efectiva o material, no formal (por todas STC n.º 6/2003, de 20 de enero) y, no hay indefensión cuando se tiene conocimiento del pleito en un momento procesal oportuno para personarse y actuar en él en defensa de los derechos de que se es titular (por todas STC n.º 77/2001, de 26 de marzo). En el presente procedimiento, cuando la Sra. efectivamente se personó en plazo para recurrir en apelación, pudo defender sus pedimentos en cuanto a custodia, visitas y alimentos y no lo hizo (STS 308/2022, de 19 de abril). Pero es que además, conforme a lo que la Audiencia considera probado –y no se combate por la vía adecuada–, la Sra. C tuvo conocimiento extraprocesal del pleito. Como se declara, por todas, en STC n.º 181/2003, de 20 de octubre «no puede ser protegido quien no ha puesto la debida diligencia

en la defensa de sus derechos e intereses bien colocándose al margen del proceso mediante una actitud pasiva con el fin de obtener una ventaja en la marginación, bien cuando puede deducirse que poseía un conocimiento extraprocesal de la existencia del litigio en el que no fue personalmente emplazado». Se desestima el recurso de casación.

5.- SENTENCIA 695/2025, DE 6 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 8446/2024

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez

Votación y fallo: 23/04/2025

Materia: Derecho de familia. Alimentos. Carencia de relaciones afectivas y de comunicación entre los padres alimentantes y los hijos alimentistas.

«El recurso de casación no puede construirse desentendiéndose completamente de los hechos que la sentencia recurrida ha considerado probados y articulando un relato alternativo sobre hechos ya valorados y no asumidos. Esto, en casación, no es admisible, ya que no puede modificarse la base fáctica fijada por la instancia, salvo en casos excepcionales mediante la vía del error de hecho patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones, circunstancia que no ha sido planteada por los recurrentes (por todas, sentencia 504/2025, de 27 de marzo).

Pero es que, además, la doctrina que se recoge en la sentencia de esta Sala que mencionan los recurrentes —la 104/2019, de 19 de febrero—, es clara: para apreciar como causa de cesación de la pensión alimenticia incardinable en el art. 152.4 del CC en relación con el art. 853.2, la carencia de relaciones afectivas y de comunicación entre los padres alimentantes y los hijos alimentistas habría de aparecer probado que «la falta de relación manifiesta entre padre e hijos, sobre la que no existe duda, era, de modo principal y relevante, imputable a éstos». Lo que no acontece en el presente caso, ya que, como observa la Audiencia Provincial, el conflicto familiar acreditado no es atribuible exclusivamente a la hija. Lo que se ha constatado es la existencia de una relación deteriorada desde hace años, agravada por episodios recíprocos de hostilidad y culminada con la salida de la hija del domicilio por decisión de sus padres. Siendo estas las circunstancias, no puede considerarse a aquella responsable exclusiva de la situación, ni imputársele una voluntad de romper los vínculos familiares de forma unilateral e injustificada. Y así lo destaca también, de forma acertada y acorde con nuestra jurisprudencia, la Audiencia Provincial cuando señala, sobre la ausencia de relación entre los litigantes, ciertamente admitida por la hija, «que la misma no es exclusivamente imputable a la apelada, por lo que no se cumplen los parámetros jurisprudenciales exigidos para que se produzca la causa de extinción de los alimentos». Se desestima el recurso de casación.

6.- SENTENCIA 685/2025, DE 6 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 470/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez

Votación y fallo: 08/04/2025

Materia: Impago por procurador de la cuota colegial obligatoria variable. La acción para exigir su pago no se encuentra sometida al plazo de prescripción del art. 1966.3.ª del CC, sino al plazo general de prescripción del art. 1964 CC.

«La cuota obligatoria —que es fija— tiene una indudable naturaleza periódica, ya que el colegiado debe abonarla de forma recurrente y regular, lo que encaja perfectamente en el marco del art. 1966.3.ª del CC, puesto que su pago debe efectuarse mensualmente, dentro de los cinco primeros días de cada mes.

Por el contrario, la cuota variable depende de la intervención del procurador en cada procedimiento e instancia, lo que introduce una notable flexibilidad, pues únicamente se devenga cuando se produce la personación en el correspondiente proceso. Esta circunstancia impide calificarla como una obligación periódica en el sentido técnico del art. 1966.3.ª del CC, que se refiere a obligaciones distintas de las de pagar pensiones alimenticias o satisfacer el precio de los arriendos, pero que, como estas, deben cumplirse de forma regular y continuada en plazos determinados —por años o más breves—.

En este caso, nos encontramos ante una obligación cuya exigibilidad nace únicamente cuando se produce un hecho generador concreto: la actuación procesal del procurador. Por tanto, no se trata de una obligación de cumplimiento constante, ni sujeta a vencimientos preestablecidos, sino de una prestación eventual, dependiente del ejercicio profesional efectivo. Esta naturaleza es incompatible con la previsibilidad temporal exigida para aplicar el plazo prescriptivo especial de cinco años previsto en el art. 1966.3.ª del CC, reservado a pagos que deben realizarse en intervalos temporales uniformes y previamente fijados por años o en plazo más breves.

En consecuencia, al carecer la cuota variable de dicha regularidad y previsibilidad, la acción para exigir su pago no se encuentra sometida al plazo de prescripción del art. 1966.3.ª del Código Civil, sino al plazo general de prescripción del art. 1964, al tratarse de una obligación personal que no tiene un término especial de prescripción. Este plazo comienza a contarse desde el momento en que el procurador se persona en el procedimiento concreto, momento en el que surge la obligación de pago frente al Colegio». Se estima el recurso de casación.

7.- SENTENCIA 729/2025, DE 12 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 8150/2023

Ponente: Excm.a Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán

Votación y fallo: 06/05/2025

Materia: Derecho de familia. Relaciones paternofiliales. Comunicaciones y visitas con el progenitor no custodio. Art. 94.I y IV CC.

«La motivación de la sentencia recurrida no es puramente formal ni se limita a señalar los beneficios que en abstracto resultan para los niños del contacto con ambos padres. Por el contrario, pondera lo que es mejor para la situación y el desarrollo de la niña.

La sentencia argumenta que por el bien de la menor las vistas deben restablecerse, ya que mantenerlas en suspenso por una sentencia dictada en el ámbito de la violencia de género que afecta a la madre y no a la niña y que no es firme «supone cortar toda relación entre la niña y su padre, causándose un perjuicio irreparable cuando además las visitas en sede de medidas provisionales ya se hacían en un Punto de Encuentro Familiar y supervisadas, lo que dota de garantía a la reunión familiar».

De esta forma, la sentencia recurrida ha ponderado los derechos e intereses en juego, atendiendo al interés primordial de X, razonando por qué el

sistema de visitas que establece es, en atención a las circunstancias, el que de manera más adecuada resulta más beneficioso para ella. La sentencia se ajusta por ello a la doctrina de esta sala, porque establece un sistema de comunicación entre la niña y el padre limitado y tutelado, sometido a una evaluación. Partiendo del derecho de los niños a relacionarse con el progenitor con el que no conviven, el derecho de visitas solo puede excluirse totalmente por razones graves y justificadas, cuando la relación con el progenitor no custodio se revele objetivamente perjudicial para el niño. En este caso, como dice la Audiencia, partiendo de una sentencia de condena no firme, la valoración de la relación paterno-filial se lleva a cabo conforme al informe del Punto de Encuentro Familiar del que resulta, dice la Audiencia, y esta sala ratifica tras su lectura, «se observa que la niña no muestra rechazo alguno hacia el padre, simplemente se retrae, entendemos que ante una persona con la que no convive y que prácticamente no conoce, y se destaca la actitud colaboracionista del progenitor que se interesa constantemente por los gustos y preferencias de su hija para que ella se sienta mejor en los encuentros, pero, insistimos no hay rechazo alguno hacia el padre».

Frente al argumento de la sentencia de primera instancia que acordó suspender el régimen de visitas porque según el informe del Punto de Encuentro Familiar la niña no interactuaba con el padre, la sentencia recurrida argumenta sensatamente que el informe inicial del PEF de Coslada es de 21 de abril de 2022, que abarca las dos primeras visitas de 27 de marzo y 9 de abril, cuando la niña no había cumplido todavía los cuatro años y hay que darle tiempo para esa adaptación, y que poco a poco, si efectivamente se siguen las directrices del Centro, siempre cabrá ese acercamiento cuando la niña de entrada no rechaza al padre y cuando le comunican allí que está para verlo y no se niega. La sentencia también recalca del informe que cuando la niña «es abrazada por su padre y le hace cosquillas no se aparta y las acepta, circunstancia que también consta en el informe al folio 223, aparte de interactuar con ella en las actividades que realizan y hacer comentarios positivos cuando hace algo bien, lo que X acepta. En ningún momento se refleja en el informe que sea necesario y ni tan siquiera conveniente la suspensión de esos encuentros».

Es esa valoración cuidadosa de las circunstancias la que lleva a la sentencia recurrida a descartar la aplicación automática del art. 94.IV CC para evitar la ruptura definitiva del vínculo entre el padre y X. Con este fin establece el sistema idóneo en atención a las circunstancias, de visitas supervisadas, los sábados cada quince días, de 11:00 a 13:00 horas, pues permite preservar en un entorno seguro y controlado el vínculo entre la niña y el padre, evitando la supresión total del contacto que puede abocar a una desvinculación definitiva, con consecuencias negativas para la estabilidad emocional a medio y largo plazo de la niña». Se desestima el recurso de casación.

8.- SENTENCIA 732/2025, DE 13 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 288/2020

Ponente: Excm. Sra. D.^a M.^a Ángeles Parra Lucán

Votación y fallo: 30/04/2025

Materia: Responsabilidad civil. Prueba de que la lesión fue causada en un accidente de tráfico. Actos propios de la compañía aseguradora, que reconoció el siniestro y el nexo causal. La valoración conjunta de la prueba, salvo casos excepcionales, es labor del tribunal de instancia.

«La recurrente, en su motivo de casación, se centra de manera exclusiva en la aplicación por la sentencia recurrida de la doctrina de los actos propios. Este motivo, así planteado, no puede ser estimado.

Es cierto que la Audiencia da un peso importante al comportamiento de la demandada, consistente en la remisión de dos cartas por las que hizo a la actora, primero, un ofrecimiento de pago anticipado, y luego, una oferta motivada, así como que estas cartas que fueron precedidas de varias exploraciones periciales a la demandante por peritos designados por la demandada. Pero también resulta de la lectura de la sentencia que la Audiencia da por cierta la existencia del siniestro y el nexo causal con las lesiones que luego valora como conectadas con el accidente (hasta la consolidación de la fractura, que tuvo lugar de manera previa a la cirugía relacionada con el encodroma que se descubrió a raíz de la fractura, y que es algo ajeno al accidente) mediante una valoración en conjunto de la prueba.

En esa valoración conjunta de la prueba que efectúa la Audiencia se toman en consideración los informes periciales (el aportado por la actora, pero también los de la parte demandada, en los que se alude a la estabilización de las lesiones sufridas por la actora en el accidente) y los informes médicos unidos a las actuaciones, de los que se cuida en precisar la Audiencia que «con independencia de la mayor o menor corrección o precisión en la redacción que se plasma en algunos de los informes médicos».

Por tanto, no puede prosperar el argumento de la recurrente acerca de que, de haber conocido el dato que se refleja puntualmente en la historia clínica no se hubiera comportado como lo hizo, pues con ello no se llegaría tampoco a desvirtuar la valoración probatoria que subyace al razonamiento de la Audiencia Provincial y que le lleva a afirmar que la causa de la lesión de la actora fue un accidente de circulación mientras iba de ocupante en el vehículo asegurado por la demandada». Se desestima el recurso de casación.

9.- SENTENCIA 696/2025, DE 6 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 8468/2024

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez

Votación y fallo: 23/04/2025

Materia: Derecho de familia. Pensión compensatoria. Reconvención implícita. En el presente caso no cabe concluir que la petición de pensión compensatoria formulada por la demandada puede estimarse a pesar de que no se planteó en forma de reconvención en el escrito de contestación a la demanda. Dicha omisión no constituye un mero defecto formal subsanable, sino un incumplimiento sustancial de una exigencia procesal cuyo respeto es imprescindible para la válida articulación del contradictorio y para garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa.

«[...] en el presente caso no cabe concluir que la petición de pensión compensatoria formulada por la demandada puede estimarse a pesar de que no se planteó en forma de reconvención en el escrito de contestación a la demanda. Dicha omisión no constituye un mero defecto formal subsanable, sino un incumplimiento sustancial de una exigencia procesal cuyo respeto es imprescindible para la válida articulación del contradictorio y para garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa.

El art. 770.2 de la LEC establece de manera clara y categórica que la reconvención en los procesos matrimoniales deberá formularse con la

contestación a la demanda, permitiendo al actor un plazo de diez días para oponerse. La solicitud de una pensión compensatoria por parte del cónyuge demandado encaja de manera inequívoca dentro del supuesto contemplado en la letra d) del citado precepto: se trata de una medida definitiva no solicitada en la demanda y respecto de la cual el tribunal no puede pronunciarse de oficio. Por tanto, su inclusión en el proceso exige la formulación expresa de una reconvencción.

Esta exigencia se refuerza, además, por lo dispuesto en el art. 406 de la misma Ley, que no solo limita la admisibilidad de la reconvencción a los casos de conexión con las pretensiones de la demanda, sino que, en su apartado tercero, dispone con rotundidad que no se considerará formulada reconvencción si esta no se plantea de forma expresa y clara. Más aún, el precepto impide expresamente que pueda entenderse formulada reconvencción implícita, esto es, que no cabe deducir la existencia de una pretensión reconvenccional por la mera inclusión de solicitudes en el cuerpo del escrito de contestación, o por su formulación en sede de vista.

Este marco normativo responde a una lógica sustancial: el cauce de la reconvencción no es un simple formalismo sino una garantía procesal destinada a preservar la igualdad de armas entre las partes. Permite al actor, no solo conocer de forma precisa y con la antelación debida las pretensiones de la parte contraria que exceden de la mera oposición, sino además articular frente a ellas una respuesta adecuada, con el mismo grado de preparación, reflexión y apoyo documental que exige el art. 399 de la LEC para la demanda principal. Su omisión, por tanto, conlleva una privación efectiva del derecho a la contradicción en condiciones de equilibrio. Dicha omisión no constituye un mero defecto formal subsanable, sino un incumplimiento sustancial de una exigencia procesal cuyo respeto es imprescindible para la válida y efectiva articulación del contradictorio en condiciones de equilibrio y para garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa». Se desestima el recurso de casación.

10.- SENTENCIA 694/2025, DE 6 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 5749/2024

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez

Votación y fallo: 22/04/2025

Materia: Derecho de familia. Medidas definitivas. No nos encontramos ante un supuesto de privación de la patria potestad, sino ante un caso de titularidad compartida con ejercicio exclusivo por uno de los progenitores, lo que excluye la infracción del art. 170 del CC que se denuncia. Y también es ajustado a Derecho y conforme con nuestra doctrina el régimen de comunicación acordado que representa un delicado equilibrio entre la necesidad de preservar el interés del menor y el derecho del padre a mantener algún grado de relación con su hijo. No hay motivo suficiente ni para suprimirlo, como pretende la madre, ni para ampliarlo en este momento, como sostiene el padre.

«Aunque en la sentencia recurrida se menciona la privación y recuperación de la patria potestad con referencia al art. 170 del CC, ello obedece a una imprecisión. Lo acordado por la sentencia de primera instancia, y confirmado por la Audiencia Provincial al desestimar en este punto el recurso de apelación interpuesto por el Sr. X, no implica una privación —total o parcial— de su potestad, sino la atribución exclusiva de su ejercicio a la Sra. Y. Esto significa que no nos encontramos ante un supuesto de privación de la patria potestad,

sino ante un caso de titularidad compartida con ejercicio exclusivo por uno de los progenitores, lo que excluye la infracción del art. 170 del CC que se denuncia. [...]

La sentencia recurrida se ajusta a nuestra doctrina, ya que establece un régimen de comunicación y visitas entre el menor y su padre limitado, tutelado y progresivo que, lejos de resultar arbitrario o desajustado, responde a una ponderación adecuada del conjunto de circunstancias que rodean la situación familiar y, en particular, del interés superior del menor, que debe guiar cualquier decisión en la materia conforme al art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y al art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Los progenitores han recurrido el pronunciamiento de la sentencia, aunque desde posiciones contrapuestas: la madre, solicitando la supresión total de cualquier régimen de visitas, y el padre, considerando insuficiente y excesivamente restrictivo el régimen establecido. Sin embargo, ninguno de los recursos merece acogida, pues el sistema articulado por el juzgado resulta razonable, necesario y proporcionado a la luz de las circunstancias del caso, respondiendo con equilibrio y proporcionalidad al interés superior del menor, sin sacrificar innecesariamente ninguno de los derechos en conflicto.

En primer lugar, debe recordarse que el derecho de un progenitor a relacionarse con su hijo no deriva directamente del ejercicio de la patria potestad, sino de la existencia del vínculo de filiación. El hecho de que la patria potestad haya sido atribuida en exclusiva a la madre, como consecuencia de la actitud de desatención sostenida del padre, no impide per se —por sí mismo— la existencia de un régimen de comunicación y visitas. Este debe establecerse en atención al interés del menor, y solo se puede excluir totalmente por razones graves y justificadas, cuando la relación con el progenitor no custodio se revele objetivamente perjudicial para el hijo. En el presente caso, no se ha acreditado tal perjuicio, ni se ha probado que el padre haya tenido comportamientos inadecuados durante las visitas previamente supervisadas. Tampoco consta que se encuentre en condiciones personales que hagan inviable la relación, más allá de la necesidad de que el contacto se produzca con apoyos específicos y bajo control institucional.

El régimen establecido por el juzgado es idóneo y proporcionado, pues permite preservar el vínculo entre el menor y el padre en un entorno seguro y controlado. La previsión de visitas mensuales en el Punto de Encuentro Familiar, sujetas a supervisión y con posibilidad de evolución futura en función del desarrollo del menor, se ajusta a las características del caso y responde a una lógica de mínima intervención pero con garantía de protección. Lejos de constituir una medida meramente formal o simbólica, este régimen busca mantener un espacio de vinculación que, de no existir, podría verse irremediablemente afectado. En efecto, en situaciones como la presente, la supresión total del contacto puede abocar a una desvinculación definitiva, con consecuencias negativas para la estabilidad emocional del menor a medio y largo plazo». Se desestiman los recursos de casación.

Además, la Sala ha firmado las siguientes sentencias en materias con doctrina reiterada:

11.- SENTENCIA 642/2025, DE 28 DE ABRIL. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 4167/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Votación y fallo: 23/04/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Dies a quo del cómputo del plazo para la prescripción de la acción restitutoria. Aplicación de la doctrina de la STS (pleno) 857/2024, de 14 de junio (BBVA).

12.- SENTENCIA 644/2025, DE 28 DE ABRIL. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 4307/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Votación y fallo: 23/04/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Prescripción de la acción restitutoria. Allanamiento de la parte recurrida. Admisibilidad (BBVA).

13.- SENTENCIA 641/2025, DE 28 DE ABRIL. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 3999/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Votación y fallo: 23/04/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Prescripción de la acción restitutoria. Allanamiento de la parte recurrida. Admisibilidad (BBVA).

14.- SENTENCIA 676/2025, DE 5 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 4308/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Votación y fallo: 30/04/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Dies a quo del cómputo del plazo para la prescripción de la acción restitutoria. Aplicación de la doctrina de la STS (pleno) 857/2024, de 14 de junio (BBVA).

15.- SENTENCIA 637/2025, DE 28 DE ABRIL. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 2380/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Votación y fallo: 30/04/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de

restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Dies a quo del cómputo del plazo para la prescripción de la acción restitutoria. Aplicación de la doctrina de la STS (pleno) 857/2024, de 14 de junio (BBVA).

16.- SENTENCIA 677/2025, DE 5 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 4315/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Votación y fallo: 30/04/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Prescripción de la acción restitutoria. Allanamiento de la parte recurrida. Admisibilidad. Reiteración de jurisprudencia (BBVA).

17.- SENTENCIA 674/2025, DE 5 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 1113/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Votación y fallo: 30/04/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Prescripción de la acción restitutoria. Allanamiento de la parte recurrida. Admisibilidad (BBVA).

18.- SENTENCIA 675/2025, DE 5 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 4224/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Votación y fallo: 30/04/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Prescripción de la acción restitutoria. Allanamiento de la parte recurrida. Admisibilidad (BBVA).

19.- SENTENCIA 634/2025, DE 28 DE ABRIL. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 6243/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Votación y fallo: 23/04/2025

Materia: Ley 57/1968. Cooperativa de viviendas. Es aplicable a una cooperativa de viviendas titular del derecho de superficie sobre el suelo en el que se debían construir las viviendas adquiridas por los socios para fines residenciales. Responsabilidad de la entidad de crédito demandada, conforme al art. 1-2.^a de dicha ley, por la totalidad de las aportaciones ingresadas en cuentas de la promotora en dicha entidad. Comienzo del devengo del interés legal; es remuneratorio de las cantidades anticipadas y, por tanto, exigible desde cada anticipo.

20.- SENTENCIA 638/2025, DE 28 DE ABRIL. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 2385/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg
Votación y fallo: 23/04/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Dies a quo del cómputo del plazo para la prescripción de la acción restitutoria. Aplicación de la doctrina de la STS (pleno) 857/2024, de 14 de junio (BBVA).

21.- SENTENCIA 672/2025, DE 5 DE MAYO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 6945/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg
Votación y fallo: 30/04/2025

Materia: Ley 57/1968. No incurre en la responsabilidad del art. 1-2.ª la entidad de crédito que no consta conociera los anticipos de los compradores por haber sido ingresados por una sociedad mercantil. Reiteración de doctrina jurisprudencial. Incongruencia de la sentencia recurrida por resolver al margen del objeto del debate. «Promociones Eurohouse S.L.». «Residencial Fortuna Hills Golf Resort».

22.- SENTENCIA 673/2025, DE 5 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 868/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg
Votación y fallo: 30/04/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Prescripción de la acción restitutoria. Allanamiento de la parte recurrida. Admisibilidad (BBVA).

23.- SENTENCIA 723/2025, DE 5 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 3764/2021

Ponente: Excmo. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán
Votación y fallo: 06/05/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Prescripción de la acción restitutoria. Allanamiento de la parte recurrida. Admisibilidad (BBVA).

24.- SENTENCIA 689/2025, DE 6 DE MAYO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 743/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez
Votación y fallo: 22/04/2025

Materia: Eficacia de contrato de adquisición de acciones y responsabilidades derivadas. Recurso de casación. Se estima. Remisión a la jurisprudencia sobre la falta de acción en relación con la adquisición de acciones del Banco Popular. Las cuestiones planteadas en este recurso han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 1135/2023, de 11 de julio,

1137, 1138 y 1139/2023, de 12 de julio, 1212/2023, de 25 de julio, y 1214/2023, de 26 de julio, que aplican la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia de 5 de mayo de 2022 al conocer de recursos similares (Banco Santander).

25.- SENTENCIA 691/2025, DE 6 DE MAYO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 836/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez

Votación y fallo: 22/04/2025

Materia: Eficacia de contrato de adquisición de acciones y responsabilidades derivadas. Recurso de casación. Se estima. Remisión a la jurisprudencia sobre la falta de acción en relación con la adquisición de acciones del Banco Popular. Las cuestiones planteadas en este recurso han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 1135/2023, de 11 de julio, 1137, 1138 y 1139/2023, de 12 de julio, 1212/2023, de 25 de julio, y 1214/2023, de 26 de julio, que aplican la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia de 5 de mayo de 2022 al conocer de recursos similares (Banco Santander).

26.- SENTENCIA 722/2025, DE 12 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 2635/2021

Ponente: Excma. Sra. D.^a M.^a Ángeles Parra Lucán

Votación y fallo: 06/05/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Prescripción de la acción restitutoria. Allanamiento de la parte recurrida. Admisibilidad (BBVA).

27.- SENTENCIA 721/2025, DE 12 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 2384/2021

Ponente: Excma. Sra. D.^a M.^a Ángeles Parra Lucán

Votación y fallo: 06/05/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Prescripción de la acción restitutoria. Allanamiento de la parte recurrida. Admisibilidad (BBVA).

28.- SENTENCIA 725/2025, DE 12 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 4175/2021

Ponente: Excma. Sra. D.^a M.^a Ángeles Parra Lucán

Votación y fallo: 06/05/2025

Materia: Condiciones generales de la contratación. Acción de nulidad de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario con consumidores y acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Prescripción de la acción restitutoria. Allanamiento de la parte recurrida. Admisibilidad (BBVA).

29.- SENTENCIA 693/2025, DE 6 DE MAYO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 982/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez

Votación y fallo: 22/04/2025

Materia: Eficacia de contrato de adquisición de acciones y responsabilidades derivadas. Recurso de casación. Se estima. Remisión a la jurisprudencia sobre la falta de acción en relación con la adquisición de acciones del Banco Popular. Las cuestiones planteadas en este recurso han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 1135/2023, de 11 de julio, 1137, 1138 y 1139/2023, de 12 de julio, 1212/2023, de 25 de julio, y 1214/2023, de 26 de julio, que aplican la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia de 5 de mayo de 2022 al conocer de recursos similares (Banco Santander).

30.- SENTENCIA 690/2025, DE 6 DE MAYO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 788/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez

Votación y fallo: 22/04/2025

Materia: Eficacia de contrato de adquisición de acciones y responsabilidades derivadas. Recurso de casación. Se estima. Remisión a la jurisprudencia sobre la falta de acción en relación con la adquisición de acciones del Banco Popular. Las cuestiones planteadas en este recurso han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 1135/2023, de 11 de julio, 1137, 1138 y 1139/2023, de 12 de julio, 1212/2023, de 25 de julio, y 1214/2023, de 26 de julio, que aplican la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia de 5 de mayo de 2022 al conocer de recursos similares (Banco Santander).

31.- SENTENCIA 688/2025, DE 6 DE MAYO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 729/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez

Votación y fallo: 22/04/2025

Materia: Eficacia de contrato de adquisición de acciones y responsabilidades derivadas. Recurso de casación. Se estima. Remisión a la jurisprudencia sobre la falta de acción en relación con la adquisición de acciones del Banco Popular. Las cuestiones planteadas en este recurso han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 1135/2023, de 11 de julio, 1137, 1138 y 1139/2023, de 12 de julio, 1212/2023, de 25 de julio, y 1214/2023, de 26 de julio, que aplican la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia de 5 de mayo de 2022 al conocer de recursos similares (Banco Santander).

Mayo 2025.